



INTERNATIONAL CENTRE FOR
TRADE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Vol. I No. 1

Septiembre 1998

Bienvenidos a *PUENTES*

Como ha ocurrido en otros períodos de la historia, los procesos de fuerte desarrollo y expansión económica no pasan por las naciones sin dejar huella en lo político, lo social, la cultura y lo ambiental.

En los últimos 10 a 15 años, América Latina ha vivido un proceso semejante, impulsado fundamentalmente por políticas de liberalización económica, uno de cuyos aspectos más importantes es la creciente liberalización comercial tanto a nivel subregional como mundial.

Cuando se observa que las barreras arancelarias han caído estrepitosamente desde la segunda mitad de los '80, que las exportaciones de bienes en el mismo período han crecido a un promedio anual del 8.4%, y que la tasa promedio anual de crecimiento del PIB para la región entre 1991 y 1997 (3.5%) es tres veces superior a la de la década anterior, es sólo cuestión de sentido común intuir las transformaciones e impactos que esto provoca.

Ejemplos abundan: el Mercosur se erige en ámbito de promoción de la estabilidad política en los países miembros al establecer la plena vigencia del sistema democrático como condición de pertenencia; el florecimiento de industrias de exportación son causa fundamental de la alteración de la vida social y la cultura de un creciente número de poblaciones, así como de la destrucción de algunos ecosistemas; la creciente actividad comercial impulsa grandes proyectos de infraestructura, con impactos sociales y ambientales inciertos; cada vez son más las empresas que impulsadas por los mercados de exportación buscan distintos tipos de certificación para sus productos; la exigencia de competitividad internacional provoca profundos cambios en la naturaleza y la calidad del empleo. Por otra parte, pese a la indudable contribución de la liberalización al crecimiento del ingreso nacional¹, los índices de pobreza y distribución del ingreso no mejoran significativamente, y hasta empeoran.

A medida que la conciencia sobre estos impactos crece, quienes se preocupan por ellos, en particular las organizaciones de la sociedad civil, dirigen su atención a los marcos políticos e institucionales que rigen la liberalización del comercio internacional (principalmente la Organización Mundial del Comercio, los bloques subregionales -Mercosur, Mercado Común Centroamericano, Comunidad Andina- y el Área de Libre Comercio de las Américas), exigiendo una mayor transparencia en los procesos políticos nacionales e internacionales que permita comprender con claridad y tener parte

en las decisiones que marcan el rumbo que está tomando el desarrollo.

La intersección del comercio internacional y el desarrollo sostenible, como tema, nace de estas preocupaciones y búsquedas. Con las sucesivas liberalizaciones y el crecimiento en el comercio y la inversión, este tema comienza a trascender círculos más o menos reducidos y se instala en la agenda política de los gobiernos, los empresarios, los sindicatos y una multiplicidad de actores sociales. Así, a medida que el proceso se va enriqueciendo, se vuelve importante encontrar canales de información y debate constructivo.

La liberalización es fuente potencial de grandes beneficios y grandes costos - frente a ella hay una pregunta fundamental: ¿Es posible poner esta fuerza al servicio del desarrollo sostenible? ¿Cómo? Situaciones como las generadas por la crisis mexicana de 1994 y los recientes acontecimientos en Asia nos recuerdan que los procesos de globalización, integración y liberalización económica no son procesos ilustrados, sino el resultado de fuerzas más bien ciegas, que nuestras sociedades deben manejar con inteligencia.

Esta publicación nace de la necesidad de responder a este desafío, y de la convicción de que parte de la respuesta radica en:

- Ampliar el número de actores involucrados en el tema - son muchas y variadas las voces que deben aportar a este debate, para enriquecerlo e instalarlo con mayor solidez en nuestras sociedades;
- Promover la investigación en América Latina para mejorar el nivel de discusión y de propuesta política - en un debate internacional con consecuencias globales es importante generar conocimiento e ideas desde nuestro contexto específico;
- Promover el diálogo intersectorial, para mejorar la comunicación y el intercambio de ideas creativo y racional;
- Promover la transparencia y la participación en la formación y seguimiento de las instituciones que rigen el comercio internacional.

En este primer número hemos pedido a un funcionario gubernamental y a una ONG que nos presenten el tema desde sus vivencias y puntos de vista particulares. Aunque limitados al aspecto ambiental (uno del espectro temático que abordaremos en sucesivos números), ambos artículos son una buena introducción a una cuestión compleja e importante.

¹ Calculado de manera tradicional; ajustado por variables ambientales este crecimiento se reduciría notablemente.

EN ESTA EDICION

Comercio Internacional y Medio Ambiente	2
Una Herejía Exitosa	3
El Nuevo Régimen Comunitario del Banano	4
Noticias OMC	5
Mecanismo de Solución de Diferencias	6
AMUMAs	7
Noticias Regionales	9
Calendario de Eventos y Publicaciones	12

Comercio Internacional y Medio Ambiente: Factores de una Compleja Relación¹

Por Héctor Rogelio Torres

En un escenario internacional crecientemente "globalizado", los compartimentos estancos son cada vez menos relevantes. Así, como en una sociedad tradicional, la práctica de las libertades económicas suele hacer que ciertos cambios en las estructuras políticas se tornen inevitables, en la sociedad mundial, la llamada "globalización" no puede venir sola.

El comercio internacional y el medio ambiente, son dos elementos de esa globalización destinados a interactuar tempranamente. Ambos, casi por definición, sobrepasan a las jurisdicciones nacionales. La creciente aplicación de los principios de "trato nacional" y de "nación más favorecida", tanto a bienes, como a servicios, derechos de propiedad intelectual e inversiones, va dejando pocos resortes de arbitrio exclusivo de los gobiernos nacionales. Por su parte, el crecimiento de la población mundial, las innovaciones tecnológicas y la aspiración a paradigmas de consumo compartidos, hacen que los efectos ambientales del proceso económico puedan ser, solo raras veces, contenidos dentro de fronteras nacionales.

Las líneas que siguen intentan bosquejar para el lector, los principales elementos de esta relación compleja, en la que intervienen tanto gobiernos (con sectores vinculados al comercio internacional y a la protección ambiental que no siempre se comunican), como "actores no gubernamentales".

Opinión Pública y Actores No Gubernamentales

Los movimientos de opinión y grupos de presión ambientalistas, principalmente en los países desarrollados, van cobrando una creciente importancia. Esto se traduce en su persistente labor por mejorar los niveles de protección ambiental de las diferentes actividades económicas que se desarrollan tanto en sus países como en lugares distantes del mundo (p.ej.: explotación de forestas tropicales, caza de ballenas, etc.).

Entre ellos, hay un importante movimiento de opinión que, de buena o mala fe, vincula estos mayores niveles o estándares de protección ambiental con la competitividad de los costos de producción - es decir, los costos de producción serían menores en los países con menores niveles de protección ambiental o con niveles satisfactorios en lo teórico, pero sin implementación práctica. Si bien, hasta el momento, no hay comprobación empírica de que "los controles ambientales impuestos por las economías industrializadas" estén "desviando inversiones en actividades intensivamente contaminantes" hacia mercados con menores estándares ambientales², no debemos olvidar que vivimos en un mundo compuesto no solo por realidades fácticas, sino, fundamentalmente, por las percepciones subjetivas que tenemos de las mismas. En economías desarrolladas estancadas o de bajo crecimiento y con bajos índices de ocupación laboral, este tipo de prédicas podrían potenciarse con independencia de cualquier comprobación empírica.

A esto cabe agregar que muchos sectores ambientalistas sienten una fuerte desconfianza hacia la libertad de comercio internacional y sus organismos reguladores, principalmente el ex- GATT, hoy la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto se debería, entre otras causas, a la percepción de que algunos de los más caros logros ambientales podrían diluirse fácilmente por vía del libre comercio, y la creencia de que habría países en desarrollo dispuestos a sacar partido de los mayores niveles de protección ambiental exigidos en las economías desarrolladas, ofreciéndose como virtuales "santuarios para la polución".

La desconfianza se ve aumentada por el hecho de que la OMC es una organización intergubernamental a la que las ONGs no tienen acceso (a diferencia de lo que sucede con las organizaciones inscriptas en el sistema de las Naciones Unidas). Esto se debe principalmente al hecho de que en la OMC se negocian concesiones comerciales que afectan a intereses económicos concretos. Si se abriera la puerta a la participación (asistencia a reuniones) de organizaciones no gubernamentales, la presencia de organizaciones que representen a los intereses en juego (asociaciones de agricultores beneficiados por subsidios, empleados de una acería protegida de la competencia internacional, etc.) impediría toda negociación. Podría argumentarse, con cierta razón, que las ONGs ambientales no representan a este tipo de intereses y que, en consecuencia, podría hacerse una excepción. Sin embargo, hasta el momento los intentos por franquicarlos el acce-

so a las reuniones del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC han tenido resultados modestos. Por una parte la experiencia de foros donde se les permite el derecho a palabra (como el Comité de Desarrollo Sustentable de la ONU) es muy poco seductora; por otra parte, no está clara la posibilidad de delinear una excepción "a la medida" de las ONGs verdes y, finalmente, muchos países simplemente no tienen interés en ventilar sus posiciones. El resultado es que las ONGs ambientales consideran que están doblemente excluidas de ese foro. Por una parte no tienen acceso, por la otra, quienes sí lo tienen (los representantes gubernamentales) representan intereses comerciales.

Finalmente, no menos importante es tener presente que el "negocio ambiental" (bienes de capital, tecnología y servicios vinculados con la protección ambiental), que se estima actualmente en US\$ 420.000 millones se espera que llegue a los US\$ 600.000 millones en el año 2010 y que "continúe su crecimiento a una tasa sin precedentes durante el siglo XXI"³. Obviamente este volumen de negocios genera una fuerte presión favorable a la imposición e implementación de mayores niveles de protección ambiental en el mundo.

Actores Gubernamentales y el Proceso de Negociación Internacional.

Si bien la vinculación entre el comercio internacional y el medio ambiente es objeto de análisis en varios foros internacionales, la discusión más importante se lleva a cabo en la OMC.

Ello se debe fundamentalmente a que la OMC es una de las organizaciones internacionales con mayor capacidad de imponer políticas por encima de las soberanías nacionales; ya que el sistema de negociación de la OMC es una buena síntesis de la relación dialéctica entre el poder real (en este caso económico) y el poder formal (la igualdad jurídica de los Estados traducida en la regla de "un Estado un voto"), lo que ha hecho que la organización sea más "confiable" para las principales potencias, prueba de lo cual es la extensión de su competencia hacia áreas "vinculadas" al comercio.

En este movimiento de extensión de la competencia de la OMC se inscribe el esfuerzo hecho - principalmente por los EE.UU.- por integrar en el paquete de resultados de la Ronda Uruguay del GATT, la creación de un Comité de "Comercio y Medio Ambiente" (CTE).

La creación del CTE fue impulsada por los EE.UU y resistida por el bloque de países en desarrollo, debido a la percepción de que cualquier vinculación entre el Sistema de Comercio Internacional y las políticas de protección ambiental sólo podría traerles más condicionamientos comerciales.

Este Comité, a diferencia de los otros que integran la estructura institucional de la OMC (con la excepción del de Comercio y Desarrollo), no tenía por función administrar alguno de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, sino "identificar la relación entre las medidas comerciales y las medidas ambientales (a fin de promover un desarrollo sostenible)" y consecuentemente proponer modificaciones - si ese fuese el caso - a las reglas del sistema multilateral de comercio⁴.

El trabajo del CTE puede claramente dividirse en dos etapas: la etapa previa a la Conferencia Ministerial de Singapur (Diciembre 1996) y la etapa posterior a la misma. La primera etapa (1995/96) fue de intenso trabajo y concluyó con la adopción de un informe que no contiene ninguna recomendación de modificación a las reglas existentes del Sistema Multilateral de Comercio. Pese a que luego de dos años de trabajo, esto puede aparecer como un resultado algo decepcionante, el informe contiene varios elementos positivos. La segunda etapa, está marcada por la fatiga dejada por los dos primeros años de negociación y también por la evidencia de que, para ir más allá del Informe Final presentado en Singapur, será necesario algún insumo exterior al propio CTE - verbigracia: el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones (Ronda o mini-Ronda) en la cual el tema ambiental se inscriba como parte del paquete negociador.

En síntesis, desde la aprobación del referido informe, la situación ha evolucionado poco o nada (salvo en lo relativo a cuestiones de procedimiento) y en consecuencia los "consensos" reflejados en su texto tienen plena vigencia como una suerte de "piso de entendimiento" para edificar una relación cooperativa entre

continúa en la página 10

Una Herejía Exitosa

Por Gustavo Alanis Ortega

A principios de los años setenta, existía una creencia ortodoxa según la cual el desarrollo económico y la protección ambiental eran irreconciliables; una economía en vías de desarrollo, podía tener progreso económico o calidad ambiental, pero no ambas cosas. Entre los asesores políticos y los economistas era una herejía afirmar que el desarrollo económico puede realmente promover la protección ambiental, y que la protección ambiental y el comercio pueden avanzar juntos.

Se dice que la ortodoxia es herejía exitosa. El comercio internacional y la conciencia ambiental se han expandido rápidamente, con mucha menor fricción y conflicto de lo que nadie había predicho dos décadas atrás, y el "desarrollo sustentable" es ahora el objetivo a alcanzar. En ningún lugar del mundo el comercio está tan expandido como en las Américas, y en ningún lugar está haciendo un progreso más rápido la nueva ortodoxia del desarrollo sustentable. El hecho que la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que abarcó en forma efectiva el comercio internacional y el medio ambiente, haya tenido lugar en América del Sur, tiene una importancia que excede lo simbólico.

La Relación Comercio y Medio Ambiente

El comercio y el medio ambiente deben ser vistos como un solo ámbito, en el que se de una armonización, una compatibilización entre lo que son las políticas económico-comerciales y las ambientales, haciendo así compatible el crecimiento y desarrollo de los pueblos, con la protección y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. La integración económica del hemisferio es una realidad, y tan lo es, que en Junio pasado iniciaron en Buenos Aires, Argentina las negociaciones formales para lo que en el año 2005 será el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Hay que reconocer que acuerdos de esta naturaleza podrían traer beneficios importantes a nuestros países, entre los que se destacan: a) mayores oportunidades de empleo; b) se facilita e incrementa la compra de productos y servicios entre los países; c) se asegura la entrada de capitales e inversión, y; d) aumenta la competitividad, lo que, en el caso del ALCA, obligará a los países latinoamericanos a producir con eficiencia, calidad y buenos precios.

Ezequiel Ezcurra ha afirmado que "satisfacer las necesidades de una creciente población humana sin deteriorar el sustento y la base de recursos naturales de donde se obtienen los mismos satisfactores, es el desafío mas grande de las décadas por venir". Es claro que la población de América Latina necesita mas recursos para desarrollarse y alcanzar un mejor nivel de vida. Al mismo tiempo, necesitamos conservar nuestros recursos naturales y su productividad para futuras generaciones. Aquí, se plantean dos interrogantes: ¿Cómo obtener más de la tierra sin degradar el ambiente? y ¿Cómo desarrollamos en forma equitativa y sustentable?

Dentro de los grandes retos a contemplar, está la implementación de estrategias integrales que disminuyan los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, con procesos productivos limpios que ahorren agua, energía y materia prima, disminuyan la cantidad y la peligrosidad de los residuos que generan y fomenten el reuso y reciclaje de materiales.

El promover un comercio sustentable implica no sólo ser ambientalmente responsable y contribuir a mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno, sino que además significa buscar mejorar la calidad de vida de las personas, brindando mayores oportunidades para mejorar los ingresos de la población y un cambio positivo en las condiciones laborales de los trabajadores.

El Medio Ambiente en Procesos de Integración

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá pusieron de manifiesto su interés por los temas ambientales durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA) ya que, independientemente de que estos están contemplados en el TLC/NAFTA, suscribieron un acuerdo paralelo al TLC en materia ambiental, conocido como el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA). Por otro lado, el Tratado de Asunción de 1991, estableciendo el MERCOSUR mencionó al medio ambiente sólo tangencial-

mente, pero a principio de 1992, los presidentes de los países miembros de este acuerdo comercial adoptaron la Declaración de Canela sobre el Medio Ambiente y, en agosto de 1994, dieron otro paso adelante al aprobar un conjunto de Guías Ambientales Básicas y un Acuerdo Sobre Transporte de Sustancias Peligrosas.

A nivel hemisférico, estos mismos temas surgieron en la preparación de la Cumbre de las Américas celebrada en diciembre de 1994 en Miami, Florida.

Los esfuerzos para poner la protección ambiental y la liberalización del comercio al servicio del desarrollo sustentable no se limitan a este hemisferio. Los avances sobre el medio ambiente y comercio en el mundo, impactarán directamente en el comercio hemisférico, porque los productos de esta región están hoy en todo el mundo.

A nivel global existe mayor esperanza en reconciliar al comercio con la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Como parte del Acuerdo Final de la Ronda Uruguay, las partes acordaron formar un Comité sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, para analizar las uniones comerciales y la protección ambiental, y para sugerir cambios apropiados y necesarios al GATT, ahora Organización Mundial de Comercio (OMC) a efecto de hacerlo más sensible a las políticas ambientales. Esfuerzos similares están ocurriendo en el contexto del Programa de las Naciones

Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), que se encuentra enfrentando difíciles problemas incluyendo la interacción entre la OMC y los Acuerdos Ambientales Multilaterales preeminentes, tales como la Convención de Basilea.

Rol de los Gobiernos

En lo que respecta a los gobiernos, las naciones deberán asesorarse adecuadamente a efecto de adoptar medidas uniformes que aseguren protección ambiental y no pensar en las mal llamadas barreras ambientales al comercio internacional. Esto es especialmente cierto en las Américas, donde, a lo largo y a lo ancho las leyes y regulaciones ambientales son todavía escasas y conflictivas. Este escenario relativamente limpio, provee de una excelente oportunidad para que los países coordinen sus esfuerzos y adopten medidas ambientales armónicas a lo largo de la región. También las naciones de América Latina tienen la oportunidad de evitar los errores y las, a veces, innecesarias políticas rígidas de las leyes ambientales de Estados Unidos, adoptadas después de desastres ambientales en los sesenta y a principio de los setenta. Evitar la rigidez y centrarse en un enfoque cooperativo y preventivo, permitirá a los gobiernos de América latina diseñar un sistema único distintivo de regulación ambiental.

Rol del Sector Privado

Con respecto al sector privado, las empresas y los inversionistas han acumulado considerable experiencia sobre la adopción de la gestión ambiental y pueden ahora trabajar coordinadamente con funcionarios ambientales nacionales y municipales y con grupos ambientales a efecto de desarrollar prácticas de gestión ambiental, basadas en el concepto de Desarrollo Sustentable. Ya se ha hecho algún progreso hacia este fin. Por ejemplo, el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sustentable y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales han unido esfuerzos para enfrentar la necesidad de armonizar leyes y regulaciones en el Cono Sur.

Las empresas y los inversionistas necesitan: 1) ser sensibles a los requerimientos ambientales de los países importadores (las mal llamadas ecobarreras); 2) estar alertas al gran número de acuerdos ambientales internacionales que afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones; y 3) Atender los requerimientos ambientales que pueden ser impuestos como una condición de los Bancos multilaterales como garantías financieras o de préstamos.

Conclusión

En vista de lo anterior, considero que no hay vuelta para atrás; el desarrollo económico y la protección ambiental van de la mano; la gran pregunta en el fondo es no si realmente lo son, sino cómo vamos a lograr compatibilizar las políticas ambientales y las económico-comerciales. EL ALCA representa una oportunidad única en la apertura de los mercados para incrementar el intercambio co-

continúa en la página 11

El Nuevo Régimen Comunitario del Banano en la Unión Europea: Una asignatura Pendiente con la Organización Mundial del Comercio

Por Francisco Alvarez de Soto

El pasado 28 de julio, fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la nueva Regulación del Consejo No. 1637/98 del 20 de julio, por medio de la cual se enmienda la muy controversial Regulación 404/93 que fuera impugnada por el Grupo de países llamado G-5¹ y que hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la se comenzará a implementar el nuevo régimen, regirá la importación, venta y distribución del banano de la Unión Europea.

A pesar de los esfuerzos que supuso el proceso de solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, donde el G-5 obtuvo reportes favorables por parte del Grupo Especial² y el Organo de Apelación del Mecanismo de Solución a Diferencias³ el resultado final parece no haber satisfecho a los países productores y comercializadores de la fruta. Según el G-6⁴ el régimen propuesto en enero por la Comisión Europea, y ahora aprobado por el Consejo de Ministros, sigue siendo restrictivo y discriminatorio para con la fruta latinoamericana de estos países.

¿En qué consiste entonces este régimen para la importación, venta y distribución del banano que ha sido aprobado? ¿Por qué sigue siendo éste incompatible con las normas y principios de la OMC? Un breve análisis del mismo nos dará las respuestas.

Nuevo régimen aún basado en cuotas

En términos generales el régimen aprobado sigue basándose en un sistema de contingentes arancelarios. Estos contingentes se distribuyen del siguiente modo:

- **Contingente ACP:** En este contingente de 857.700 toneladas métricas se engloba la producción de todos los países de Africa, Caribe y el Pacífico que forman parte del convenio de Lomé. Esta producción puede ser importada a la UE libre de arancel. Es curioso destacar que en la nueva reglamentación, el texto hace referencia a este contingente como "cantidad disponible", aún cuando es obvio que se trata de un contingente.
- **Contingente Consolidado:** En este contingente de 2.2 millones de toneladas métricas, se engloba la producción de los países latinoamericanos del área dólar y que incluye a los cuatro proveedores que la UE ha identificado en su propuesta como "substanciales": Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá. Adicionalmente participan en ella los demás miembros del G-6 y los que han conformado el ahora disuelto Acuerdo Marco del Banano junto a Costa Rica y Colombia; Nicaragua y Venezuela. Esta producción puede ser importada a la UE pagando un arancel de 75 ECU por tonelada. Se establece también que, en cumplimiento de las obligaciones de la UE bajo el artículo XIII del GATT, la Comisión Europea deberá negociar con los cuatro proveedores substanciales. La Comisión asignará estas participaciones de manera unilateral basándose para ello en el período de referencia establecido, que para este caso, parece ser el trienio 94-96⁵. Es importante indicar que si bien los países productores ACP pueden acceder a este contingente hasta por un total de 90.000 toneladas, los países proveedores que participan del mercado europeo a través de este contingente no puede acceder a las mal llamadas "cantidades disponibles" para los países ACP.
- **Contingente autónomo:** En este contingente de 353.000 toneladas se engloba el mercado de los nuevos países miembros de la UE, Australia, Suecia y Finlandia. A este contingente pueden acceder todos los proveedores: los ACP libres de arancel, los demás pagando un arancel de 75 ECU por tonelada métrica.

Licencias de Importación

El nuevo régimen habla de la implementación de un sistema de licencias de importación para administrar estos contingentes. No obstante la importancia que supone conocer con certeza este sistema para poder determinar aspectos de compatibilidad de un régimen de contingentes bajo el paraguas de la OMC, en el caso que nos ocupa, la Regulación tan solo da directrices a las instancias pertinentes de la Comisión Europea para que implemente dicho sistema basándose para el otorgamiento de las licencias en dos conceptos importantes: la llamada importación efectiva y la utilización del período de referencia 94-96. Es importante

destacar que, en el caso de las licencias de importación la Comisión Europea, a la hora de redactar la propuesta que ha sido ahora aprobada, tuvo que eliminar las licencias anteriormente denominadas tipo "B" y que eran otorgadas de manera casi arbitraria a los operadores europeos, junto con las llamadas "huracán" que eran otorgadas también arbitrariamente a los operadores en caso de que se dieran desastres meteorológicos que destruyeran las producciones de los países ACP de los que importaban su fruta.

Las reformas que se han dado son puramente cosméticas: el régimen que regía bajo la regulación 404/93 se mantiene con la nueva Regulación: los países ACP siguen gozando de un trato preferencial que, por ir más allá de la excepción aprobada bajo GATT, es discriminatorio en detrimento obvio del banano latinoamericano, más competitivo y de mejor calidad. El argumento de la UE ha sido que sus compromisos de la Ronda Uruguay la eximían de cumplir con sus obligaciones de no discriminación; sin embargo, el Organo de Apelación constató que las asignaciones de los países ACP, más allá de la preferencia arancelaria que tienen, son inconsistentes con el Artículo XIII porque son discriminatorias y no están amparadas por la excepción de Lomé que únicamente se refiere a violaciones al artículo I de GATT. Por otra parte, al crear un contingente arancelario separado menos favorable para el banano de Latinoamérica, el Régimen de la UE discrimina en contra de todos los proveedores latinoamericanos -substanciales o no-, favoreciendo a los proveedores no substanciales ACP.

Próximos Pasos

A pesar de las múltiples manifestaciones del G-6 en diferentes ocasiones y foros, la Comisión logró un objetivo: la aprobación de su propuesta con mínimas alteraciones al texto. El régimen se comenzará a implementar el 1 de enero de 1999. ¿Qué opciones tiene entonces el G-6 para detener la implementación de este régimen a todas luces inconsistente con las formas de la OMC? La búsqueda de una respuesta a esta pregunta nos lleva al Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD). El artículo 21.5 establece el concepto de "procedimiento expedito" de revisión del cumplimiento de los reportes emitidos por los Grupos Especiales. Las directrices marcadas por el 21.5 deben ser comparadas e interpretadas conjuntamente con las establecidas en el art. 22, párrafos 2 y 6. La referencia que ambos artículos hacen al concepto de "compatibilidad" permiten argumentar que ambos deben ser tratados conjuntamente con el propósito de poder determinar, el posible escenario que se le plantearía al G-6 de recurrir nuevamente al OSD dentro de la fase que hemos denominado de procedimiento de cumplimiento.

Según el 21.5 el procedimiento de cumplimiento debería comenzar con la solicitud de convocatoria y de ser posible con el grupo especial que resolvió el Panel para que determine si las medidas adoptadas por la UE son compatibles con los acuerdos abarcados. Para ello, el grupo especial cuenta con 90 días desde que se le someta el asunto. Quedan por resolver, sin embargo, dudas a cerca del propio proceso: ¿"Conforme a los presentes procedimientos" implica consultas, según establece el art.4 del ESD? ¿En qué fecha debe someterse el asunto al Grupo Especial de forma que comiencen a correr los 90 días para la distribución de su informe? El art. 21.1 del ESD establece que es necesario el pronto cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones. Con esta afirmación sería lógico pensar que el OSD auspiciará un procedimiento de cumplimiento lo más expedito posible pues, de lo contrario, el mismo ESD vería su jurisdicción puesta en tela de juicio al estar sujeta a medidas dilatorias como las que supondrían nuevas rondas de consultas.

En caso de que el grupo especial en efecto determine que las medidas adoptadas en este caso por la UE no se ajustan a las recomendaciones y resoluciones dictadas, le correspondería al G-5 remitirse a lo dictado por el artículo 22.2 en cuyo caso el miembro afectado deberá iniciar negociaciones "si así se le pide" tendientes a "hallar una compensación mutuamente aceptable", teniendo que culminar dichas negociaciones sin ir más allá de los "20 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial..." De no llegarse a un acuerdo, entonces el mismo artículo establece que se "podrá pedir la autorización del OSD para sus-

continúa en la página 11

Colombia Busca Excepción ante OMC para Proteger Producción de Sal Indígena

El Gobierno de Colombia busca una excepción a sus obligaciones ante la OMC con el propósito de proteger a la comunidad indígena Wayyú y la transformación de la industria colombiana de producción de sal. En su notificación (WT/COMTD/N/8) a la OMC, Colombia invoca las provisiones de la Sección C del GATT, Artículo XVIII. Estas provisiones permiten a los países en desarrollo proveer asistencia gubernamental para "promover el establecimiento de una industria en particular con miras a elevar el nivel general de vida de su pueblo", si "ninguna medida consistente con otras provisiones de este Acuerdo es practicable para alcanzar ese objetivo".

Colombia sostiene que la extracción manual de sal es la única fuente de subsistencia para los 130,000 miembros de la importante comunidad Wayyú, que por siglos ha extraído manualmente sal de la mina en Manuare en el noroccidente de Colombia. Como consecuencia de la reforma constitucional de 1991, el Gobierno ha reconocido los derechos ancestrales de los Wayyú sobre los territorios donde se realizan los trabajos de extracción y se alcanzó un acuerdo sobre la parte correspondiente a la comunidad (25%) en una nueva compañía llamada Salinas Marítimas (SAMA). Un Fondo de Bienestar Social y Desarrollo, fue establecido para promover el trabajo comunitario en las áreas de salud, educación y servicios sanitarios básicos. SAMA quiere reorganizar y modernizar la producción de sal, de tal manera que 3.000 indígenas puedan mantener la extracción manual de 150,000 toneladas y al mismo tiempo incrementar la producción mecanizada hasta que alcance las dos terceras partes del volumen total. En tanto, la producción actual de sal (mitad manual, mitad mecanizada) cuesta US\$ 15.2 por tonelada, el incremento planeado en producción mecanizada (mientras se conservan las 150,000 toneladas de la cuota manual a un costo de US\$ 25.4 por tonelada) reducirá el promedio ponderado del costo de producción a US\$ 8.8 por tonelada.

Colombia requiere de una dispensa de sus obligaciones bajo el artículo XI del GATT (Eliminaciones Generales de Restricciones Cuantitativas) a fin de establecer una licencia no automática para importaciones de sal cruda, que estará en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2002. A partir de 1999 las licencias de importación serán otorgadas hasta un nivel del 6% del consumo doméstico con un incremento anual del 3% hasta alcanzar el 15% en el 2002, fecha en la cual el requisito de las licencias previas de importación será levantado.

De acuerdo al Gobierno, las provisiones del artículo XVIII Sección C se aplican en este caso debido a que, "dadas las circunstancias excepcionales de esta industria doméstica, los mecanismos existentes bajo los Acuerdos de la OMC no permiten la necesaria protección para esta transformación." El Acuerdo de Salvaguardias no se aplica pues tan sólo permite que las medidas sean aplicadas a importaciones de "productos similares o directamente competitivos": en este caso el problema concierne a la importación de sal refinada, mientras que la industria necesita protección para producir sal en crudo. El aplicar tarifas sustancialmente altas a la importación de sal tampoco es una opción debido a los compromisos de Colombia bajo el Arancel Externo Común vigente en la Comunidad Andina. El pedido está actualmente bajo consideración de los miembros de la OMC.

Consejo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

La reunión del Consejo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, tuvo lugar el 16 de julio pasado. El único resultado de la reunión fue una propuesta realizada por la Unión Europea acerca del procedimiento para establecer un mecanismo multilateral que registre indicaciones geográficas sobre vinos y licores.

Existe al interior del Consejo un gran interés por revisar anticipadamente las obligaciones de los países en desarrollo bajo el ADPIC, en lo relativo a derechos de autor, patentes, marcas registradas y otras áreas relativas a la propiedad intelectual más avanzadas, que funcionarios de la OMC califican como "un intento para hacer el proceso más eficiente".

Un grupo pequeño de países en desarrollo, entre los que destacan Singapur y Hong Kong, desean someterse a la revisión anticipada. India, por el contrario, reclama que no hay mandato ni obligación alguna bajo los Acuerdos de la OMC para este tipo de proceso, y que teme que esta revisión anticipada sobre la implementación de los Acuerdos, pongan presión innecesaria sobre otros países en desarrollo para que también se sometan a esta clase de revisiones.

Comité sobre Acuerdos Comerciales Regionales (CACR)

La reunión del Comité sobre Acuerdos Comerciales Regionales tuvo lugar del 6 al 7 y del 9 al 10 de julio.

En una iniciativa anunciada por el Consejo General de la OMC el 15 de julio, el Presidente del CACR comunicó que el Comité puede permitir a los miembros el "dejar brevemente de lado los desacuerdos sobre cómo interpretar y clarificar las normas de la OMC con los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC)".

Los miembros deben armonizar unos treinta Acuerdos Regionales de Comercio con las normas de la OMC. De ponerse de acuerdo sobre éste punto, el Comité podría avanzar en la revisión de las Uniones Aduaneras y las Áreas de libre Comercio a su cargo. Una fuente de la OMC explicaba: "podemos dejar de lado aquellas cosas que no están claras, y tratar de llegar a conclusiones temporales sobre los diferentes ARC".

Con la excepción del Mercosur, los miembros del Comité, se sienten frustrados con el lento progreso de las revisiones, las cuales se prevé terminar a finales de 1998. Por su parte, el Mercosur no tiene apuro alguno para concluir la revisión de su Acuerdo.

Según el artículo XXIV del GATT, un ARC es declarado como consistente con las normas de la OMC si cubre "sustancialmente todo el comercio" entre las partes, y si los Miembros del ARC aplican sustancialmente las mismas obligaciones y "otras regulaciones de comercio" (como medidas antidumping y de salvaguardia) a sus otros socios comerciales que no son miembros del Acuerdo. A varios miembros del CACR preocupa que al resolver la ambigüedad que rodea al artículo XXIV, resulte una aplicación más estricta de las obligaciones bajo la OMC en relación a los Acuerdos Regionales de Comercio existentes, lo que podría conllevar a una costosa renegociación de las normas regionales de comercio.

Una fuente de la OMC mencionó que la discusión sobre temas de comercio regional puede convertirse en un factor importante en la nueva Ronda de Negociaciones, la Ronda del Milenio. La próxima reunión del CACR está prevista para el 3 y 4 de diciembre próximos.

Mecanismo de Solución de Diferencias

Comienza Revisión de Mecanismo de Solución de Diferencias

El 10 de junio los Miembros de la OMC comenzaron las discusiones sobre la revisión del Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) establecido en los Acuerdos de la Ronda de Uruguay. Los Miembros debatieron la posibilidad de incluir en el proceso de revisión a expertos externos o al Órgano Permanente de Apelación, sin tomar ninguna decisión al respecto. La revisión deberá concluir a fines de este año. Cualquier cambio en el MSD deberá acordarse por consenso entre los Miembros de la OMC.

Se espera que el trabajo sustantivo de revisión comience el 22 de junio, en la próxima reunión del MSD. Japón ya sometió un documento de 20 páginas, solicitando inter alia fortalecer la fase de consulta del procedimiento para mitigar la carga de casos y al mismo tiempo proveer a los Paneles de una explicación detallada de los casos que lleguen a ser tratados. Entre otros puntos mencionados por Japón se encuentran el desarrollo de procedimientos de trabajo estandarizados con relación a la pericia científica y técnica, incluyendo aquellos que buscan la selección de individuos o entidades expertas; y reuniones al interior de los Paneles, incluyendo las partes involucradas en las discusiones y los individuos o entidades expertas. El documento afirma que las deliberaciones deben mantenerse en estricta confidencialidad; sin embargo, apoya el establecimiento de fechas límites para la entrega de versiones públicas, cuando sean solicitadas por algún Miembro, al igual que plazos para que los informes finales dejen de ser confidenciales.

Por su parte las sugerencias de Corea incluyen el derecho a designar asesores privados de cualquier nacionalidad en la delegación de un país a fin de que "aboguen sus puntos de vista y asesoren en materia legal". También propone el establecimiento de una nómina de candidatos que representen un amplio espectro de conocimientos, del cual se escogerían los miembros de los Paneles. Corea reclama que bajo las reglas actuales, "algunos Miembros de países desarrollados muestran una cierta preferencia por funcionarios gubernamentales, especialmente por los diplomáticos radicados en Ginebra, mientras que otros Miembros tienden a favorecer académicos y practicantes de nivel internacional. Este sesgo arraigado entre los Miembros no sólo causa retrasos sino que también frustra el cumplimiento del objetivo del MSD de asegurar la pericia, independencia e integridad de los Paneles.

En atención a la situación particular de los países en desarrollo bajo el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), Venezuela también ha entregado un documento no oficial sobre posibles temas a ser incluidos en la revisión. Considerando que la Secretaría no está actualmente en capacidad de asistir eficientemente a los países en desarrollo en sus casos, Venezuela sugiere que el número de consultores legales al interior de la Secretaría de la OMC se eleve de tres a cinco y que se los organice como una unidad jurídica independiente para "asegurar la neutralidad requerida por la Secretaría como tal". Otras propuestas de Venezuela incluyen el establecimiento de un "Consejo de Defensa" permanente para ayudar a los países en desarrollo y a los países menos desarrollados cuando se llevan casos contra ellos, al igual que el establecimiento de un "fideicomiso para financiar las alianzas estratégicas con oficinas de abogados y firmas privadas para ampliar el alcance de los servicios de consultoría y asesoría".

En la Reunión Ministerial de mayo, muchos países comentaron el éxito y la eficiencia del MSD, remarcando frecuentemente su rol en la defensa de los intereses de los países en desarrollo y para evitar la imposición de medidas unilaterales arbitrarias. Filipinas y Paquistán solicitaron la revisión del proceso para estudiar los problemas provenientes de los altos costos que acarrea el planteamiento de conflictos, la complejidad del sistema, la imposibilidad de imponer decisiones en contra de los grandes socios comerciales, y la ausencia de cronogramas definitivos de acuerdo al sistema. El presidente Clinton instó a la OMC a hacer públicas las audiencias sobre resolución de disputas y poner al alcance del público los informes de las partes. Comprometió a los Estados Unidos "a hacer público todo Panel

en el cual seamos parte", y retó a toda nación para unírseles y contribuir a que esto ocurra. Más adelante, solicitó que los informes sometidos a los Paneles por las organizaciones de la sociedad civil fueran aceptados, y que los informes de los Paneles estuvieran disponibles al público tan pronto como sean emitidos. El Representante Comercial de los Estados Unidos ha solicitado los comentarios del público sobre cómo debería proceder Estados Unidos respecto de esta revisión.

Hacia una Guerra Comercial o un Nuevo Panel sobre Banano?

La Unión Europea rechazó el pedido de los Estados Unidos de evaluar la compatibilidad con la OMC de la propuesta de la UE para implementar la Decisión de septiembre de 1997 del Órgano de Apelación contraria a las licencias y las cuotas para las importaciones de banano. El régimen actual del banano favorece las importaciones de los países de África, el Pacífico y el Caribe que pertenecen a la Convención de Lomé (APC).

El 14 de enero, la Comisión Europea propuso un "Plan de Implementación" que establecería una nueva cuota tarifaria de 300 ECUs por tonelada compartida entre "todos los proveedores que tengan un interés sustancial" en el Mercado Europeo del banano, mientras se mantiene la cuota actual de 2,2 millones de toneladas con una tasa tarifaria de 75 ECUs. Los demandantes en el caso han argumentado enérgicamente que la propuesta es inaceptable y que la UE debería utilizar únicamente tarifas, y no cuotas para el tratamiento preferencial de las bananas del APC.

Después de que Estados Unidos rechazara el estudio de compatibilidad con las normas de la OMC, el representante comercial de ese país envió una carta oficial a la UE calificando a la propuesta de la Comisión como "no mejor, sino incluso peor que la del régimen actual en sus deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de la UE frente a la OMC", y advirtiendo a la UE que si adopta esta propuesta, Estados Unidos "no dudaría en ejercer todos sus derechos bajo la tutela de la OMC", incluyendo "el retiro de concesiones en contra de los bienes y servicios de la UE".

Por otra parte en la última reunión del Consejo de Ministros, la UE ha subrayado los pasos que ha tomado para cumplir con las decisiones de la OMC sobre su régimen de importación de banano. Honduras, en representación de Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Panamá y México, preguntó si la UE estaba lista para reconvenir la decisión del Panel original que decide la aprobación de un nuevo régimen por el Consejo de Ministros de la UE que sea consistente con las normas de la OMC. La UE no ha contestado si está lista para hacerlo, pero en el pasado ha rechazado peticiones similares realizadas por Estados Unidos. La UE tiene hasta el 1 de enero de 1999 para ajustarse a las decisiones del Órgano de Apelación.

Mientras tanto, Panamá, que adhirió a la OMC después de que el informe de Órgano de Apelación fuera adoptado, ha iniciado un nuevo procedimiento de resolución de conflictos. Panamá alega que tanto el régimen inicial de bananos de la Unión Europea como la propuesta de la Comisión "son claramente inconsistentes" con las obligaciones de la Comunidad Europea bajo las normas GATT, del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el Acuerdo sobre Procedimientos para las Licencias de Importación. Citando su "interés comercial prioritario" sobre el asunto, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Costa de Marfil han pedido ser incluidas en las consultas. Hasta ahora, ninguno de los demandantes ha solicitado que se establezca otro Panel de resolución de conflictos sobre el tema.

La queja original fue presentada ante la OMC por Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, quienes también se han unido a las consultas de Panamá "para determinar cómo la Comunidad Europea pretende implementar las mencionadas reglas a la luz de la solicitud de Panamá". Sin embargo, estos países enfatizan que las consultas entre la UE y Panamá no deben alterar ni retrasar bajo ningún motivo el proceso de implementación de las recomendaciones del Órgano de Apelación.

En el Protocolo de Kioto suscrito en diciembre de 1997, las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) establecen una serie de obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta reunión de los Organos Subsidiarios (de Implementación y de Aspectos Científicos y Técnicos), ofreció una primera oportunidad para que las partes aclaren algunas dudas sobre las disposiciones del Protocolo. Entre los temas tratados estuvieron los siguientes:

- El funcionamiento de los llamados "Mecanismos de Implementación Cooperativa": la Comercialización de Emisiones, la Implementación Conjunta, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
- Los Sumideros de carbono -bosques, suelos, mares- y el cambio de uso de las tierras.
- Las sanciones por incumplimiento.

Adicionalmente se buscó definir aspectos relacionados con la evaluación de la implementación de la Convención, la transferencia de tecnología y la participación de los países en desarrollo, éste último a exigencia de algunos de los países del Anexo I.

Algunos Resultados

Las partes notaron que a pesar de los acuerdos logrados en Kioto, existen todavía muchos puntos de discordia entre los diferentes grupos sobre algunos temas que serían más complicados de lo que inicialmente aparecían. No se lograron mayores avances en la resolución de las áreas más problemáticas debido principalmente a la intransigencia de las Partes y a consideraciones políticas externas. No obstante, se tomaron las siguientes resoluciones:

Mecanismos de Implementación Cooperativa

La mayor parte de las discusiones se centraron sobre el concepto de suplementariedad (es decir, si estos mecanismos deberían ser suplementarios a las reducciones logradas domésticamente), los límites al uso de éstos mecanismos, la reglas para su funcionamiento, supervisión, y su aporte al desarrollo sostenible.

No se llegó a una conclusión definitiva, y las Partes entregaron una serie de propuestas de programas de trabajo común con puntos que deberían resolverse antes de que los mecanismos puedan entrar en funcionamiento. Esta propuesta de trabajo está contenida en el documento FCCC/SB/1998/CPR.2 que resume los principales temas que serán discutidos en la COP4 en Buenos Aires en noviembre de 1998.

Comercialización de Emisiones

Este mecanismo hace referencia al acuerdo que se logró en Kioto según el cual los países del Anexo I (Industrializados) podrán comprar y vender emisiones entre ellos, para cumplir sus obligaciones bajo el Protocolo, y de esta manera reducir el costo del cumplimiento. Al respecto ha habido una serie de propuestas sobre cómo debería funcionar, tanto de las partes mismas (principalmente de la Unión Europea y del Grupo conformado por los Estados Unidos, Japón y Rusia, entre otros), así como de otros organismos como la UNCTAD y el Banco Mundial.

Los principales puntos de discusión todavía no resueltos son: los gases cuyas emisiones se podrá transar, la posibilidad de un límite a la compra o venta de emisiones y la transparencia y registro de las transacciones realizadas. Este debate está relacionado con las reducciones ya obtenidas por Rusia y otros países de la ex-Unión Soviética por el colapso de sus economías (hot air), la cual disminuiría el nivel

total de reducciones y la proporción de las reducciones que corresponderían a cada país.

Implementación Conjunta

En el Protocolo de Kioto, la "Implementación Conjunta" se refiere exclusivamente a proyectos a realizarse entre países del Anexo I, ya que los proyectos entre países del Anexo I y otros se regularán a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Respecto a este tema, las dudas son parecidas a las que surgen en torno a la comercialización de emisiones, en particular los reportes, verificación, sanciones por incumplimiento, la definición de criterios de adicionalidad, la elegibilidad de proyectos y la cuestión de suplementariedad a los esfuerzos domésticos.

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

En la discusión de este tema se debatieron muchos de los aspectos ya mencionados, pero adicionalmente existieron otros elementos que complicaron las negociaciones. En especial, se puede mencionar: la demanda por parte de los países en desarrollo de que los proyectos financiados por el MDL contribuyan al desarrollo sostenible, y no sólo representen una forma barata para que los países del Anexo I cumplan sus obligaciones; la parte de las ganancias que deberían destinarse a apoyar a los países más vulnerables frente al cambio climático; y nuevamente, los criterios de adicionalidad y de suplementariedad.

Los Sumideros de Carbono

Las discusiones sobre sumideros de carbono y en general sobre los temas asociados con el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, fueron algunas de las más álgidas de la reunión. Una gran parte del debate se centró en si se debe pedir al Secretariado de la Convención, un informe "técnico" o "especial" sobre el tema. La primera de estas opciones implicaría únicamente una recopilación de los datos presentados en informes anteriores, en tanto que la segunda requeriría nuevas investigaciones orientadas a despejar las dudas que rodean este asunto. Finalmente, se optó por la segunda.

Adicionalmente se propuso incluir los cambios en los acervos de carbono que resulten de actividades humanas como la aforestación, reforestación o deforestación desde 1990, en el cálculo de las obligaciones de los países del Anexo I. Al respecto, se pidió al Secretariado del Convenio organizar un taller antes de la COP4 para discutir este tema con mayor profundidad. En el informe y los talleres a realizarse se incorporará una discusión de los proyectos de "secuestro de carbono y de sus impactos en otros temas ambientales", por ejemplo, agua, suelos y biodiversidad. Sobre el tema de "Sanciones por Incumplimiento" no se llegó a ninguna posición concreta.

Otros Temas

Además de los mencionados hubieron grupos de trabajo sobre temas que consideraban otros elementos de la Convención y el Protocolo de Kioto, y que requerían cierta atención. Estos incluyeron: transferencia de tecnología; evaluación de la implementación de la Convención; agenda para la evaluación de la implementación del Protocolo; apoyo a los países en desarrollo; inventarios de emisiones y la llamada "Propuesta de Brasil", que se refiere a la ejecución de la Convención a largo plazo. No se lograron conclusiones definitivas sobre estos temas y en el caso de Brasil se resolvió estudiar más la propuesta para abrir el debate sobre el futuro de la Convención después de la implementación del Protocolo de Kioto. Dado que esto es inevitable, se buscará una participación más concreta por parte de los países en desarrollo.

Para más información al respecto contactar a la Secretaría de la CCC: tel (+49-228) 815-1000, fax: 815-1999/ Internet: <http://www.unfccc.de/> email: secretariat@unfccc.de

CDB: Cuarta Conferencia de las Partes Cop 4

Del 4 al 15 de mayo se celebró en Bratislava, Eslovaquia la Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el cual cuenta con más de 172 países miembros. Entre otros temas de interés, esta Conferencia versó sobre bioseguridad, implementación del artículo 8 (j); aguas continentales, marinas y costeras, biodiversidad forestal y agrobiodiversidad, y acceso a recursos genéticos.

Entre las decisiones más importantes que se adoptaron durante la COP4 están:

- Asuntos relacionados con bioseguridad: En la última reunión del Grupo de Trabajo Especial, se decidió que la Conferencia de las Partes que apruebe el Protocolo Mundial de Bioseguridad, se celebre en febrero de 1999. Además, se decidió que las comunicaciones escritas de los gobiernos acerca de disposiciones que hayan de incluirse (o excluirse) en el Protocolo habrán de recibirse en la Secretaría hasta el 1 de julio de 1998, y que el mismo quede abierto a la firma en la sede de las Naciones Unidas.
- Acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios: Se solicitó a la Secretaría Ejecutiva que recopile información respecto de aquellas colecciones ex-situ que fueron adquiridas antes de la entrada en vigencia del Convenio, con el objeto de que las mismas sirvan de base para hacer recomendaciones a ser consideradas en la Quinta Conferencia de las Partes (COP5).
- Aplicación del Artículo 8 (j): Se estableció un grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta e intersesional para tratar la problemática relacionada a la aplicación del artículo 8 (j), relativo a los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas y locales relacionadas con el uso sustentable de la biodiversidad, y artículos conexos.

Para más información contactar a la Secretaría del CDB; tel: (1-514) 288-2220; fax: 288-6588; e-mail: chm@biodiv.org; internet: <http://www.biodiv.org>

PNUMA Lanza Negociaciones Sobre Químicos Peligrosos

Negociadores de 100 países se reunieron en Montreal del 29 de junio al 3 de julio para iniciar las negociaciones sobre un tratado mundial de las Naciones Unidas para reducir y eliminar el uso y producción de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). El Comité Internacional de Negociación tuvo un buen comienzo al preparar un instrumento jurídico vinculante sobre los COPs, alcanzando todas las metas organizacionales. Es esperado que complete este trabajo en el año 2000, con un tratado listo para ser adoptado en otoño de ese año. Las siguientes negociaciones del CIN-COPs, se realizará en febrero de 1999, en Ginebra.

Estas negociaciones del PNUMA persiguen de cerca la firma, en junio de 1998, de un Protocolo para controlar los COPs, adoptado dentro del marco de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (NU-CEE) sobre la Contaminación Transfronteriza de largo alcance del Aire.

Los COPs son sustancias químicas que se quedan en el ambiente y se bioacumulan a través de la cadena alimenticia. Los científicos han relacionado a los COPs con defectos en el sistema inmunológico, defectos neurológicos, anormalidades reproductivas, bajo conteo de espermatozoides y cáncer. Los químicos peligrosos fueron la inspiración original del movimiento ambientalista moderno, comenzando con la "Primavera Silenciosa" de Rachel Carson, en 1962. En respuesta, algunos países han desarrollado extensos controles y regulaciones a nivel nacional. Pero debido a que los químicos circulan globalmente - a través del comercio, o naturalmente a través del aire, agua y animales - ningún país actuando solo puede proteger a sus ciudadanos o medio ambiente del peligro. Otra razón para la urgencia de actuación internacional es la acumulación de existencias indeseables y obsoletas de pesticidas y químicos tóxicos, particularmente en países en desarrollo.

El Comité Internacional de Negociaciones sobre los COPs propuso dos cuerpos subsidiarios. El primero de estos es el Grupo Consultivo de Expertos (GCE), el cual se reunirá inter-sesionalmente, y cuyo objetivo es el de definir criterios para añadir más químicos a la lista de aquellos que deberán ser controlados por el Tratado. Si bien los doce químicos iniciales incluidos en la lista no son controversiales, se espera intenso debate sobre estos criterios. Como en el caso del Tratado de la NU-CEE, los doce químicos iniciales son los llamados "docena sucia". Estos son los pesticidas aldrin, clorodano, DDT, dieldrin, endrin, heptacloro, mirex, toxafene; el químico industrial hexaclorobenzeno (también usado como pesticida) y policlorado bifenilo (PCB); y dioxinos y furanos, que son subproductos no deseados generados durante la incineración o producción de cloro. En Montreal, algunas delegaciones indicaron que quisieran que la Convención del PNUMA cubra más químicos que la "docena sucia", mientras otros prefieren adoptar un Tratado que cubra sólo la docena inicial, dejando la posibilidad abierta de añadir otros en una etapa posterior. La próxima reunión del GCE tendrá lugar en octubre 1998, probablemente Bangkok.

El CIN-COPs establece un cuerpo subsidiario para considerar temas relacionados con la implementación, financiación, asistencia técnica y cooperación. El tema del financiamiento probablemente también será controversial en el futuro. Un punto alrededor del cual se esperan diferencias es sobre si el GEF será quien financie el Tratado.

Para obtener documentos de la sesión y otra información, ver la dirección electrónica de la PNUMA en: <http://irptc.unep.ch/pops/>

Expertos Adoptan Recomendaciones para Fortalecer Servicios Ambientales en los Países en Desarrollo

Sesenta expertos en servicios ambientales y desarrollo sostenible de más de 48 países en desarrollo, adoptaron un conjunto de recomendaciones para fortalecer y desarrollar el sector de servicios ambientales de los países en desarrollo. (Documento TD/B/COM.1/EM.7/L.1). De acuerdo con los expertos, la comunidad internacional puede facilitar el acceso de los países en desarrollo a los bienes y servicios ambientales y ayudarles a fortalecer su capacidad doméstica en este campo, a través del acceso privilegiado al financiamiento internacional y soporte técnico para capacitación institucional.

La reunión acordó que los gobiernos deberían buscar una mayor liberalización en el sector de servicios ambientales dentro del marco de las próximas negociaciones del GATS. Esto podría resultar en una situación de mutua ganancia, produciendo beneficios económicos y ambientales al mismo tiempo. A nivel nacional se deben establecer y mantener marcos regulatorios fuertes y efectivos para la aplicación de las leyes ambientales. Las recomendaciones refuerzan la importancia de aumentar el conocimiento ciudadano y facilitar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones respecto a las políticas ambientales.

Se pidió a los gobiernos de países desarrollados que ayuden a los países en desarrollo a acceder a tecnologías limpias, especialmente las preventivas. Por otra parte se les pidió a los países en desarrollo mejorar su capacidad de adoptar tecnologías limpias y adaptarlas a sus condiciones locales, incluso a través de normas de propiedad intelectual.

El Secretario General de la UNCTAD, Rubens Ricupero, señaló que el financiamiento y la cooperación internacional, son esenciales para ayudar a los países en desarrollo a solucionar sus problemas ambientales más apremiantes. También señaló que los países en desarrollo, que en 1996 representaron solo el 13 % de las ganancias de las industrias ambientales, pueden convertirse en los mercados de más rápido crecimiento para estos bienes y servicios. El crecimiento anual previsto para los años 1999 y 2000, es del 12% para Asia y Latinoamérica; un 10% para África y un 8% para países del Medio Oriente y Europa del Este.

Para más información contactar a: Simonetta Zarrilli, Fax: (+ 41 22 907 0044), e-mail: simonetta.zarrilli@unctad.org ó press@unctad.org

Negociaciones del ALCA continuaron en Buenos Aires

La primera Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, del 17 al 19 de junio. Paralelamente se reunió el Consejo de Viceministros de la región del 15 al 19 de junio para discutir los avances del proceso de integración, y el Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil.

Comité de Representantes Gubernamentales (CRG)

Una de las reuniones más esperadas por las Organizaciones No Gubernamentales del Hemisferio fue sin duda la del Comité de Representantes Gubernamentales para la Participación de la Sociedad Civil (CRG).

El Comité no logró nombrar Presidente. Sólo Estados Unidos y México presentaron candidatos (Miles Rushet y Héctor Marquez) y la reunión culminó sin acuerdo sobre el particular. Canadá asumirá el rol de coordinador hasta la elección de un Presidente en la próxima reunión a celebrarse en Miami en Octubre.

En cuanto al funcionamiento del CRG, cuatro propuestas (de Canadá, México, EUA y Mercosur) fueron presentadas en la reunión de Vice Ministros. Al cabo de las discusiones, se tomó la decisión de admitir únicamente comentarios de organizaciones de la sociedad civil en forma escrita, y no se anticipa comunicación directa durante los próximos meses. No se tomaron decisiones con respecto a la recepción de comentarios y el proceso para analizarlos. Sobre este último punto, se espera que en diciembre en Suriname el Comité elaborará una propuesta. Varias delegaciones latinoamericanas se opusieron a mantener reuniones, consultas u otro tipo de contacto directo con organizaciones de la sociedad civil.

Otro punto de divergencia fue la definición de "sociedad civil". Algunos argumentaron que no existe una sociedad civil hemisférica y manifestaron el temor de que las grandes organizaciones de los EUA impondrán sus propias agendas sobre las ONGs latinoamericanas.

Ciertos países mantuvieron que ya habían establecido mecanismos de participación a nivel nacional, por lo que el CRG no tendría la responsabilidad de consultar o tener reuniones con la sociedad civil. Por otra parte, algunos de los Vice Ministros indicaron que el gobierno mismo es el que representa a la sociedad civil, y que por tanto el CRG no necesita reunirse con "representantes" de la misma.

También existieron posiciones encontradas sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Algunos gobiernos argumentaron que el mandato de San José sólo requiere solicitar comentarios, y que eso no significa interacción. También intentaron definir lo que era una "participación constructiva", pero no se llegó a un acuerdo concreto. Algunos gobiernos tomaron el punto de vista que el principal rol del CRG debiera ser el de educar al público sobre el ALCA. También se discutió el rol del Comité Tripartito (BID, CEPAL, OEA) en este tema. Mientras unos argumentaron que se había solicitado el apoyo del Comité Tripartito sólo para análisis técnico, otros indicaron que el Comité tiene la capacidad y los recursos para procesar la cantidad de comentarios anticipados, y que además tiene la capacidad técnica para analizar esos comentarios.

Se mantuvo también la discusión sobre la posibilidad de asignar al CRG el papel de analizar todos los comentarios que provinieran del sector civil, pero algunos países indicaron que esto presentaría riesgos tales como que el CRG discrimine e ignore temas importantes y que se paralice al enfrentarse con temas contenciosos, por lo cual dicha responsabilidad debería recaer sobre los ministros.

Preparado en base a un informe preparado por Atziri Ibañez (NWF), Ana L. Hernandez (F.Ambio) y Gustavo Alanis Ortega (CEMDA)

CAN - MERCOSUR: Avanzan Negociaciones

Las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur avanzan cumpliendo con la agenda prevista en el Acuerdo Marco para la Creación de la Zona de Libre Comercio entre los dos bloques regionales.

Según se establece en el Acuerdo Marco, hasta el 30 de septiembre el Mercosur y la CAN negociarán un Acuerdo de Preferencias Arancelarias sobre la base del "patrimonio histórico" y que podrá incluir productos nuevos. Dicho Acuerdo reemplazará a los Acuerdos de Alcance Parcial aún vigentes entre los dos bloques.

El Acuerdo de Preferencias, que entrará en vigencia el 1 de octubre de 1998, establecerá márgenes de preferencia fijos e incorporará disciplinas comerciales en el marco de la ALADI. Además entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1999, el Mercosur y la CAN negociarán un Acuerdo de Libre Comercio que abarcará los productos contemplados en el Acuerdo Arancelario y demás productos del universo arancelario, el que entrará en vigencia el 1 de enero del año 2000.

La lista de los países andinos está compuesta por 2.700 productos, mientras que la del Cono Sur es de 1.400. La CAN ha pedido varias veces la postergación de la primera reunión de negociaciones, las cuales finalmente se han llevado a cabo el 30 de junio y 1 de julio en Montevideo, en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Luego del intercambio de listas y el inicio del proceso de apertura, no ha habido grandes avances. Esto, debido especialmente a cierta oposición de los sectores agrícolas de los países andinos debido a los niveles de preferencia que se solicitan y a su desacuerdo con los actuales términos de las negociaciones.

La Segunda Reunión de negociaciones para el Acuerdo de Preferencia Arancelaria se llevó a cabo del 4 al 7 de agosto, en Lima. La firma de este Acuerdo cerrará el primer capítulo hacia la creación de la Zona de Libre Comercio previsto en el Acuerdo Marco.

Un análisis económico revelado en la última reunión señala que las exportaciones totales de la CAN crecieron de 28 mil millones de dólares en 1992 a 48 mil millones en 1997. Esto representó una tasa de crecimiento promedio de 10,9%, frente a la tasa de crecimiento del 9,7% que experimentó el Mercosur en el mismo período (de 51 mil millones a 81 mil millones). Respecto a las importaciones, la tendencia es alcista en los dos bloques: una tasa promedio anual del 19,4% para el Mercosur y del 9,9% para la CAN.

Negociaciones Mercosur - Union Europea Cuestionadas por Agricultores Europeos

A finales de julio la Comisión Europea (CE) finalmente aprobó las negociaciones con el Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). El panorama no ha sido fácil para el bloque latinoamericano desde que los Ministros de Agricultura de la UEd decidieron detener el proceso comercial, hasta que se haga un estudio sobre el impacto de la liberalización comercial sobre el mercado agrícola de la UE.

Varios sindicatos de agricultores europeos están alertando sobre los efectos dañinos para el sector agrícola, si el acuerdo llega a concretarse. Un informe interno de la Comisión Europea revela que la UE tendría que financiar cerca de 15 billones de dólares por año para compensar a los agricultores por la pérdida de mercado debido a la entrada de productos más baratos provenientes del Mercosur. Este informe además señala que la baja producción del Mercosur no es un problema de carencia de tierras, sino de falta de mercados. Al respecto se indica que sólo el 7 % de la superficie del Mercosur es explotada con fines agropecuarios contra un 30 % de la UE. El Gobierno Francés se ha expresado a favor del mantenimiento de la "política agraria común y el modelo agrícola europeo", apoyando la tesis de los sindicatos agrícolas.

Sin embargo, Manuel Marín, Comisionado Europeo para Relaciones Norte-Sur, dijo que el impacto de dicho Acuerdo Comercial ha sido exagerado, puesto que la negociación excluye los productos agrícolas más sensibles, incluyendo cereales, carnes y azúcar, cumpliendo aun así con las recomendaciones de la OMC de cubrir el 90% del comercio entre el Mercosur y la UE.

Por su parte los negociadores del Mercosur han advertido que no seguirán con el proceso, mientras algún producto quede fuera del marco de negociaciones.

Comercio Internacional y Medio Ambiente... continuado de la página 2

ambos sistemas de normas, las comerciales y las ambientales.

El Sistema Multilateral de Comercio y el Medio Ambiente

Antes de continuar convendría aclarar una pregunta básica: ¿Por qué puede haber fricciones entre el Sistema Multilateral de Comercio (SMC) y las políticas de protección ambiental?

Todo el SMC descansa sobre la regla de la no discriminación, regla que se refleja en dos principios básicos:

- Trato Nacional: No discriminación entre productos nacionales y extranjeros
- Multilateralización de la Cláusula de la Nación más favorecida: No discriminación entre productos de tercer origen.

Ambos principios, además, se extienden progresivamente hacia la no discriminación entre "productores" radicados en el mercado nacional y radicados en terceros países y entre estos últimos entre sí.

Las políticas ambientales suelen necesitar políticas de premios y castigos, vale decir, discriminar entre quienes cumplen y quienes no cumplen con determinadas prácticas de protección ambiental. Desde luego, tanto las zanahorias como los palos, pueden estar directamente vinculadas con los productos comercializados. Más aún, las políticas ambientales pueden necesitar diferenciar entre distintos Métodos y Procesos de Producción (MPPs), en virtud de sus externalidades ambientales.

Así, estas políticas pueden necesitar:

- Discriminar entre los países miembros y no miembros de un acuerdo de protección ambiental (limitando el comercio de un determinado producto o restringiéndolo exclusivamente a aquel que tiene lugar entre los países que cumplen con las prescripciones del acuerdo de protección ambiental).
- Discriminar entre métodos de producción "limpios" o "dañinos" (autorizando solo la comercialización de los productos elaborados con determinados MPPs).

Esta es, en síntesis y con variaciones de diversa índole, el área de potencial conflicto.

Hay, sin embargo, también un área de contacto cooperativo entre el SMC y las políticas ambientales. La liberalización de los intercambios comerciales, como indican algunos autores, promueve una mejor asignación de recursos económicos (mediante el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas) y esta disminuye la presión del proceso productivo sobre el medio ambiente (menos unidades de recursos utilizados para lograr una misma unidad de producto).

Posible Evolución del Escenario.

En función de lo expuesto se vislumbra como posible la siguiente evolución del escenario a corto y mediano plazo:

- Desarrollo de una alianza táctica entre sectores ambientalistas y sectores económicos proteccionistas. Al respecto, quisiera señalar la extrañeza de escuchar apelaciones en defensa de la "soberanía nacional" (un concepto sin duda difícil de compatibilizar con la defensa del medio ambiente y muy familiar para los grupos proteccionistas).
- Creciente presión por "armonizar" (imponer) los estándares ambientales considerados "adecuados" por los principales países de la OCDE.
- Más importante aún, creciente necesidad de que los países (principalmente en desarrollo) hagan una aplicación cabal de sus legislaciones ambientales nacionales. Ello vendrá fundamentalmente por dos vías: a) la presión directa con eventuales amenazas de aplicar derechos compensatorios, basados en la argumentación de que la no aplicación de los estándares nacionales a los productores locales implica un subsidio (como lo implicaría la exención de ciertos impuestos); b) la presión de los importadores, que requerirán que sus proveedores acrediten el cumplimiento con los estándares ambientales de la ISO 14.000 (para hacerse acreedores a los mismos, el primer paso es acreditar el cumplimiento con los requisitos de la legislación interna).
- En la medida en que estas presiones no sean canalizadas por vías multilaterales, o que siéndolo no prosperen o no existan garantías de la aplicación de los niveles de protección acordados, los sectores proteccionistas tendrán más posibilidades de lograr la adopción de medidas comerciales con fines ambientales.

¿Que Hacer Frente a ese Escenario?

Como primer paso, es necesario mantener abiertas las instancias de negociación multilateral, particularmente la correspondiente a la OMC. Si este proceso no se mantuviese abierto, habría crecientes presiones para la adopción de medidas unilaterales. Los conflictos resultantes de la adopción de tales medidas podrían no ser enteramente "contenidos" por la OMC y, en consecuencia, conducirían a tensiones bilaterales, las cuales encontrarían a los países en desarrollo en situación de desventaja.

Para mantener la fiabilidad del proceso multilateral es necesario evitar el absurdo de identificar a la negociación ambiental con los estériles caminos del nacionalismo decimonónico o de su versión secular e "internacionalista", la confrontación Norte-Sur. El tema ambiental debe ser asumido desde una perspectiva de cooperación internacional, para lo cual resulta imprescindible mantener los esquemas vigentes, entre ellos el del libre comercio internacional.

Sin embargo esto no será suficiente. Es necesario asumir que en una economía abierta e integrada al mercado internacional ("globalizada"), los límites del derecho interno y del derecho internacional son sumamente permeables. Por ello, el cumplimiento de las disposiciones de derecho interno, particularmente de los estándares de protección ambiental, no puede seguir siendo "una opción" para los productores locales. Será en consecuencia imprescindible implementar cabalmente el derecho ambiental nacional. Esto puede implicar un gran esfuerzo, tanto para el sector público (aumentar la capacidad de control, eliminar la corrupción, invertir en infraestructura y facilitar el crédito para adquirir equipamiento) como para el sector privado.

En la mayor parte de los países en desarrollo este esfuerzo difícilmente pueda ser financiado con recursos domésticos. Al llegar a este punto, frecuentemente se vuelve a mirar al comercio internacional y se piensa en obtener ventajas adicionales de acceso a los mercados, como una forma legítima de proveerse del capital necesario para financiar las inversiones en bienes y servicios ambientales, que permitan cumplir cabalmente con los estándares ambientales domésticos. Es necesario advertir que este es un camino de cierto riesgo.

En efecto, si aumentar las exportaciones para mejorar el medio ambiente local puede parecer un excelente negocio, es necesario tener presente que este podría igualmente ser un camino de ida y vuelta. Como dijimos antes, esta vinculación entre el acceso a los mercados y el cumplimiento de estándares ambientales domésticos del país exportador, probablemente sea un requisito, de hecho, a nivel privado (una empresa que aspire a los estándares ISO 14.000, exigirá conductas acordes de sus proveedores). Sin embargo, incluirlo en el marco de las negociaciones gubernamentales, puede requerir algunas precauciones adicionales: ¿quién juzga?, ¿quién controla y certifica?, ¿qué pasa si cambia la legislación doméstica? y, no menos importante, ¿cómo acotar esta práctica al tema ambiental?

Sin descartar el explorar este camino, particularmente si pudiéramos diseñar algunas "garantías" que prevengan de su posible abuso, nos parece conveniente complementar esta eventual opción con otro elemento: el esperado crecimiento que tendrá el sector proveedor de bienes y servicios ambientales. Por ello, a fin de promover una suerte de "círculo virtuoso", lo recomendable sería explorar una aproximación al problema tendiendo en cuenta cuatro elementos:

- Plena implementación de las políticas nacionales de protección ambiental;
- Liberalización del comercio de bienes y servicios ambientales;
- Condiciones especiales para el financiamiento y los seguros de crédito que acompañen las exportaciones de este sector;
- Condiciones especiales de acceso, incluyendo la seguridad de mayores facilidades para los bienes considerados "environmentally friendly" (es necesario advertir que el Sistema Generalizado de Preferencias -SGP- no es un instrumento válido pues las concesiones allí son unilaterales, discriminatorias y precarias), apoyo técnico y períodos de implementación especiales para los países en desarrollo.

Héctor Rogelio Torres es miembro del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la República Argentina y presta funciones en la Misión Permanente de su país ante la OMC. Sus opiniones son expresadas a título personal y no reflejan necesariamente las del gobierno de su país.

¹ Este artículo ha sido escrito a partir de "Environmental Rent. Cooperation and Competition in the Multilateral Trading System", del mismo autor, publicado por el International Institute for Sustainable Development

continúa en la página 11

² Lucas, Robert, David Wheeler and Hemamala Hettige "Economic Development, Environmental Regulation and the International Migration of Toxic Industrial Pollution: 1960-1988", en "International Trade and the Environment" Oxford University Press, 1993.

³ WT/CTE/W/70 "Liberalization of Trade in environmental Services" Contribution by the United States, World Trade Organization, November 1997

⁴ Decisión sobre Comercio y Medio Ambiente, 14 de Abril de 1994, Marrakesh

Una Herejía Exitosa... continuado de la página 3

mercantil y buscar al mismo tiempo la prosperidad económica de la región promoviendo el desarrollo sustentable.

Los gobiernos juegan y jugarán un papel importante ya que, a través de las políticas y las leyes, podrán promover que de manera efectiva se conjunten la eficiencia, el uso racional de los recursos naturales y un nivel óptimo de bienestar. Una manera de poder hacerlo es a través de la utilización adecuada de los instrumentos económicos, los que permitirán en parte estimular y acelerar la inclusión de criterios ambientales en el diseño de los procesos productivos.

La integración económico comercial deberá proseguir de manera sensible a los grados de crecimiento y desarrollo de cada nación así como atendiendo a los problemas, necesidades y prioridades de cada uno de ellos, y que incluyen aspectos sociales, culturales, políticos, democráticos, laborales y ambientales.

Desde mi muy particular punto de vista, es claro que el comercio y la protección ambiental pueden actuar en conjunto. Se requerirá de ahora en adelante de un nuevo espíritu de participación y colaboración de parte de los distintos sectores interesados, que aspiran en su conjunto, creo yo, a un mundo más próspero y menos contaminado.

Gustavo Alanis Ortega es Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

El Nuevo Régimen Comunitario del Banano... continuado de la página 4

pender la aplicación de concesiones y otras obligaciones (...), dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo prudencial". De ser autorizada la suspensión, la UE tendrá la oportunidad todavía de impugnar el nivel de la suspensión que será una "medida temporal".

Consecuencias

Las consecuencias prácticas que han de generarse de todo este proceso de solución de diferencias, son impredecibles. Está en manos del propio Órgano de Solución de Diferencias y, en consecuencia, en manos de la propia Organización Mundial de Comercio, el hacer realidad una de las luchas más grandes dentro del derecho comercial internacional: una jurisdicción coactiva, eficiente, que contribuya a eliminar las barreras al comercio entre las Naciones del Mundo.

En nuestra opinión, el caso del banano, luego de años de disputas en el seno del GATT y ahora de la OMC, puede significar la culminación de un proceso evolutivo de la solución de disputas comerciales o el cese del nuevo Entendimiento para la Solución de Diferencias. De lograr la Unión Europea implementar su nuevo régimen de importación, venta y distribución del banano, con todos los aspectos discriminatorios y restrictivos que hemos descrito, sin que por su parte, el Órgano de Solución de Diferencias permita a los países que componen el G-5 la convocatoria de un procedimiento de cumplimiento bajo el espíritu del art. 21.5 del ESD verdaderamente expedito, la "razón de ser" del propio Acuerdo y de los organismos que se crearon para su cumplimiento carecerían de sentido.

Sería muy difícil para aquellos Miembros que, como Panamá, han creído en el sistema multilateral de comercio y que, por ende, han hecho grandes esfuerzos económicos, políticos y sociales para adherirse, el justificar a sus pueblos un Acuerdo que no logra defender sus legítimos intereses comerciales.

Francisco J. Alvarez de Soto es Abogado-Negociador del Consejo de Comercio Exterior de la Presidencia de Panamá. Las opiniones y criterios expresados representan la opinión del autor y no la del Gobierno de Panamá.

¹ Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Ecuador, México.

² WT/DS27/R/USA del 27 de mayo de 1997

³ WT/DS27/AD/R del 9 de septiembre de 1997

⁴ El G-5 más Panamá.

⁵ El problema existente con la utilización de este período de referencia es que, según el G-6, no puede ser aceptable, puesto que durante estos años la Regulación 404/93 se encontraba en vigencia, por lo que los resultados generados en el mercado están completamente distorsionados.

BRIDGES

Between Trade and Sustainable Development

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES busca proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate.

Los criterios y opiniones contenidas en los artículos son propias de los autores y no reflejan necesariamente los de esta publicación.



BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz

Editora: Anja Halle

Dirección: 13, chemin des Anémones
1219 Châtelaine,
Geneva, Switzerland

Tel: (41-22) 979-9492/917-8492

Fax: (41-22) 979-9093/917-8093

E-mail: ictsd@iprolink.ch

Web: <http://www.ictsd.org>



PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de **BRIDGES**, es publicado bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Director: Nicolás Lucas

Editora: María Amparo Albán

Dirección: Casilla 17-17-558
Quito, Ecuador

Tel: (593-2) 435-521/461-273

Fax: (593-2) 462-204

E-mail: ffla1@fulano.org.ec



PASSERELLES la versión en francés de **BRIDGES**, es publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah

Dirección: B.P. 3370, Dakar, Senegal

Tel: (221) 822-2125

Fax: (221) 822-2695

E-mail: enda@enda.sn

Web: <http://www.enda.sn>

WEBSITE DEL ICTSD

<http://www.ictsd.org>

BRIDGES, PUENTES y PASSERELLES pueden obtenerse del Web Site del ICTSD en formatos .pdf y .html

Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar correo electrónico a: Majordomo@igc.apc.org. Dejar el subject en blanco. En el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo también contactar al ICTSD. También disponible en el Web Site del ICTSD.

Todas las reuniones de la OMC se celebran en la ciudad de Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Todos los números de teléfono y de fax empiezan con (41-22) 739. Los números indicados en la lista a continuación corresponden únicamente a las extensiones. Internet: <http://www.wto.org>.

- agosto 17-28 Reunión del Grupo Ad-Hoc sobre Bioseguridad de la CBD, Montreal, Canadá.
Contactar: Secretaría de la CBD, tel: (1-514)288-2220, fax: 288-6588, email: chm@biodiv.org
- agosto 17-21 Primer Congreso Regional sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guatemala, Guatemala. Especialmente dirigido a la creación de un foro permanente para la discusión de temas ambientales.
Contactar: FLACSO - Programa en Guatemala, tel: (502)362-1431, fax: (502) 332-6729
- septiembre 2-4 Primer Taller sobre Comercio y Medio Ambiente con Representantes de Gobiernos de América Latina y Organizaciones de la Sociedad Civil, Santiago de Chile. Organiza el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) con la colaboración de la Corporación Participa de Chile.
Contactar: ICTSD(direcciones y teléfonos en contraportada interior) ó a la Corporación Participa, Andrea Sanhueza, tel: (56-2) 222-5384, fax: (56-2)222-1374, email: particip@netup.cl
- septiembre 22 OMC: Organo de Solución de Diferencias.
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
- septiembre 24-25 OMC: Reunión Especial del Consejo General.
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
- septiembre 28-30 Segundo Taller sobre Cooperación Ambiental de los países del APEC sobre "Producción Limpia para un Desarrollo Sostenible en metales y minerales". Santiago de Chile.
Contactar: Francisca Reyes - Comisión Chilena del Cobre, tel: +56-2-3828234; fax: +56-2-3828301 ; email: freyes@cochilco.cl; internet: <http://www.dpie.gov.au/resources.energy/energy/apec/ecworkshop/index.html>
- octubre 14 OMC: Reunión del Consejo General
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
- octubre 21 OMC: Organo de Solución de Diferencias.
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
- octubre 26-28 OMC: Comité de Comercio y Medio Ambiente.
Contacto: Sabrina Shaw, tel: 5482, fax: 5620
- noviembre 2 OMC: Comité de Comercio y Desarrollo
Contacto: Annette Blank, tel: 5349, fax: 5774
- noviembre 15-19 Quinta Reunión Internacional de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica SIEE. Santiago de Chile.

Contactar: Osvaldo Sunkel del Comité Organizador. Universidad de Chile Diagonal Paraguay 265, Torre 15, of. 1303, Santiago de Chile; tel: +56 2 678 2308 fax: +56 2 678 2581; email: ISEEconf@abello.dic.unchile.cl; internet: <http://www.unchile.cl/facultades/ISEE3.html>

noviembre 16-19 Organización Latinoamericana de Energía (OLADE): Cuarta Conferencia de Latinoamérica y el Caribe. Santo Domingo, República Dominicana.
Contactar: OLADE; Ave. Mariscal Antonio José de Sucre No. N58-63 y Fernández Salvador, Sector San Carlos, P.O. BOX 17-11-6413. Quito Ecuador. tel: (593-2)293-529 fax: (593-2)539-684; email: enerlac@olade.org.ec; Internet: <http://www.olade.org.ec/enerlac/ing/enerlac98.htm>

noviembre 25 OMC: Organo de Solución de Diferencias
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761

diciembre 7 OMC: Comité de Comercio y Desarrollo
Contacto: Annette Blank, tel: 5349, fax: 5774

diciembre 9-11 OMC: Reunión del Consejo General
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761

PUBLICACIONES/DOCUMENTOS

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 1998. "La OMC a su Alcance: Origen, Estructura y Ordenamiento Jurídico". Quito.

E. V. K. FITZGERALD. 1998. "Inversión Extranjera Directa en América Latina: la Perspectiva de los Principales Inversores". BID/IRELA. Washington y Madrid.

FABRICE HATEM. 1998. "International Investment: Towards the Year 2002". UNCTAD/Invest in France Mission/Arthur Andersen. Ginebra.

W.VREID Y J. GOLDEMBERG. 1998. "Developing Countries are combating climate change: Actions in developing countries than will slow growth in carbon emissions". World Resources Institute. Washington.

INSTITUTO FRIDTJOF NANSEN. 1998. "Yearbook of International Co-operation on Environment and Development". Earthscan Publications. Londres.

E. GUDYNAS. 1997. "Vendiendo la Naturaleza: Impactos Ambientales del Comercio en América Latina". Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). Montevideo.

UNCTAD. 1997. "The TRIPs Agreements and Developing Countries". Secretaría de la UNCTAD. Ginebra.

J. VOGEL. 1997. "Del Conocimiento Tradicional a los Secretos Comerciales: Consentimiento Informado Previo y Bioprospección". Ecociencia/BID Quito.

